

Dilema sangriento. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, entre la lucha armada y la construcción política.

Bozza, Juan Alberto.

Cita:

Bozza, Juan Alberto (2011). *Dilema sangriento. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, entre la lucha armada y la construcción política. IX Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-034/53>

Dilema sangriento. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, entre la lucha armada y la construcción política.

Mesa 5. Las guerras en el siglo XX y XXI.

Autor: Juan Alberto Bozza.

Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS). Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata

Albertobozza@speedy.com.ar

Palabras clave: FARC-EP; violencia política; guerrilla; Unión Patriótica; paramilitares.

Introducción.

Los conflictos armados, como expresiones más o menos explícitas de guerra civil, caracterizaron a las décadas de 1960 y 1970 en América Latina. El impacto de las transformaciones económicas de signo neo liberal de los noventa y la consolidación de regímenes democráticos parlamentarios en los años recientes, parecieron clausurar esa etapa de intensos enfrentamientos sociales. Una singular excepción a ese proceso parece ser la crisis política de Colombia, prolongada hasta años recientes como enfrentamiento armado entre la insurgencia guerrillera, las Fuerzas Armadas y el Estado, grupos paramilitares y renovadas formas de injerencia del imperialismo norteamericano. A partir de esa problemática, nuestra ponencia aborda un objeto más acotado: la estrategia y las responsabilidades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la crisis institucional arrastrada durante décadas por la nación colombiana.

Reconocemos las dificultades que se interponen a la tarea. El análisis deberá discernir críticamente un terreno polarizado por fuertes rechazos y descalificaciones; donde las crónicas contemporáneas, nutridas por las agencias periodísticas internacionales y por los pronunciamientos gubernamentales; establecieron una sentencia contundente sobre la milicia comunista. Un “sentido común”, propalado por influyentes actores/emisores, ha caracterizado a las FARC como un instrumento de la irracionalidad política; su itinerario es resumido como una irresponsable ordalía terrorista, enemiga de la democracia y única responsable de más de cuatro décadas de inestabilidad en la región. Los discursos públicos prevalecientes le imputan el rechazo y la incapacidad para formular proyectos políticos y para avizorar cualquier tentativa de pacificación en Colombia. Probablemente, la orientación seguida por la guerrilla en los primeros años de este milenio favorezca las percepciones condenatorias. Los secuestros y tomas indiscriminadas de rehenes, las ejecuciones, las denuncias de atentados con armas prohibidas por la Convención de Ginebra y las ambiguas relaciones con el narcotráfico han herido gravemente la credibilidad de su proyecto emancipatorio y, tal vez, insinuado “tendencias degenerativas” en la organización¹.

¹ Las denuncias de los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia sobre actividades de narcotráfico de las FARC son controversiales. Según la propia guerrilla y algunos analistas norteamericanos, las FARC solo están involucradas en el *cobro de impuestos* a los revendedores que compran las hojas a los campesinos. Se sostiene que, como máximo, un 2,5% de todo el cultivo de coca en el país está indirectamente ligado a las FARC-EP. Scott, Wilson, (2003) "Colombia's Rebel Zone: World Apart," <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/worId/issues/colombiareport/>. Los estatutos de las FARC/EP y del ELN se comprometen a respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Sin embargo, en ocasiones realizaron actos violentos y crueles contra civiles que refutan aquel compromiso. A fines del año 1985, un grupo escindido de las FARC, el Frente Ricardo Franco, perpetró la matanza de más de 150 miembros de su organización, acusados de haber sido infiltrados por el ejército y la policía. Se la conoció como la “masacre de Tacueyó”, en Cauca, en la Cordillera Central. Equipo Nizkor, *¿Terrorismo o rebelión?*, publicación electrónica, 2 de diciembre de 2002. EEUU, Canadá y la Unión Europea incluyeron a las FARC en la categoría de “organizaciones terroristas”. Tomo el señalamiento de las “tendencias degenerativas” de Pizarro Leongómez,

Este trabajo pretende interrogar críticamente a las proposiciones y sentencias que disuelven u omiten las tramas sociales y políticas que dieron origen a las prácticas insurgentes de las FARC. Algunas preguntas y problemas orientan esta indagación. ¿Fueron las FARC las que engendraron la violencia social y política en Colombia? La lucha armada, ¿inhibió elaborar a la guerrilla un proyecto político para Colombia? ¿Siempre rechazaron las FARC los programas de pacificación de la vida política colombiana? ¿Nunca se comprometió en construir una fuerza electoral como contribución a la distensión de las formas brutales en que se expresaron las luchas sociales? Estos interrogantes acotan el perímetro de nuestra reflexión histórica. La misma parte del período en que se insinuaron los primeros conatos de la lucha guerrillera –a comienzos de los años cincuenta-, y concluye a comienzos de los noventa, cuando las FARC intentaron construir un proyecto político legalista, llamado Unión Patriótica, *exterminado sistemáticamente* por fuerzas paramilitares amparadas y sostenidas por el régimen².

La primera parte del artículo se organiza en torno a la reconstrucción histórica; reseña la evolución de la guerrilla entre el campesinado y describe las mutaciones de su estrategia a partir de las sucesivas conferencias que proyectaron sus acciones militares y planes políticos. La segunda parte analiza el lanzamiento del proyecto político más importante de las FARC, Unión Patriótica; reflexiona sobre su programa electoral y registra las causas y la metodología de exterminio, en el marco de la impunidad obtenida del Estado y de los sucesivos gobiernos.

1. LAS FARC. RAICES PROFUNDAS DE LA LUCHA SOCIAL.

La lucha guerrillera en Colombia no estuvo inicialmente relacionada con la influencia de la Revolución Cubana. Cuestiones estructurales de la sociedad colombiana engendraron la conflictividad social y la violencia política. La profunda inequidad reinante en la tenencia de la tierra, la sistemática exclusión de la participación política y las virulentas represiones a grupos disidentes que cuestionaron la naturaleza oligárquica y excluyente del régimen político fueron condicionantes históricas de largo aliento en las se inscribió la lucha armada³.

La cuestión agraria fue la dimensión más significativa del inconformismo social y de las violentas respuestas a aquellos reclamos por parte del aparato estatal y de las elites terratenientes cogobernantes. El estado de marginación estructural del campesinado y la dinámica de las guerras civiles entre conservadores y liberales fueron la raíz de los pesares de la población rural. No solo ocasionaron el despojo de sus tierras, sino que empujaron a los campesinos a colonizar otros territorios y ser nuevamente víctimas de de la represión gubernamental y paraestatal.

La resistencia campesina encontró un terreno fértil al articularse con la conflictividad política nacional. En el enfrentamiento armado bipartidario, los sectores rurales mas oprimidos apoyaron a los liberales. En estas filas, una vertiente izquierdista liderada

Eduardo (1996), *Insurgencia sin revolución. La guerrilla colombiana en una perspectiva comparada*, Bogotá, Tercer Mundo Editores / Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, pp. 9-12.

² Quedan fuera de este análisis las últimas derivaciones del conflicto y los vaivenes sufridos por el proyecto insurgente, en el marco de una profundización de la intervención de los Estados Unidos, a través del *Plan Colombia*, primero, y de la *Iniciativa Regional Andina*, de Bush y Uribe.

³ Celis Méndez, Luís Eduardo, (2008), "Construcción inconclusa de la nación colombiana". *ALAI (Agencia Latinoamericana de Información)*, América Latina en Movimiento, Quito, 22 de agosto de 2008.

por Jorge Eliécer Gaitán, era receptiva de las demandas de reparto de tierras y de frenar la voracidad de los grandes hacendados sobre la pequeña propiedad. El fenómeno se perpetuaba bajo la dominación oligárquica ejercida por los gobiernos conservadores, representantes de las “grandes familias” de latifundistas⁴. La violencia de clase, la expulsión y los desplazamientos territoriales fueron un caldo de cultivo para que varias comunas campesinas se *armaran como autodefensa* contra la impunidad de los hacendados, de sus esbirros y de las tropas gubernamentales. Algunos de estos grupos fueron liderados por liberales progresistas y por comunistas⁵.

El asesinato de Gaitán, el 9 de abril de 1948, intensificó los enfrentamientos sociales con masivas protestas urbanas, como *el Bogotazo*⁶. La guerra civil se extendió a pesar de los intentos de acuerdos entre conservadores y liberales, desencadenando un inflamable período que la memoria oficial y las efemérides escolares recuerdan como “*La Violencia*”⁷. En el periodo hubo un ajuste de cuentas lanzado por los latifundistas para recuperar las tierras ocupadas por los campesinos en años anteriores; algunos la consideran una *contrarreforma agraria* que restableció la concentración de tierras en manos de los grandes hacendados⁸.

En las regiones rurales del departamento de Tolima varias comunas campesinas se sublevaron en armas, entre ellas la de Marquetalia, convertida en experiencia de autogobierno comunista bajo los liderazgos históricos de Manuel Marulanda y Jacobo Arenas⁹. Experiencias similares se dieron en El Pato, Sumapaz, Río Chiquito y

⁴ La impronta de la concentración de la propiedad rural y la polarización de la riqueza perdura hasta nuestros días. Datos de la primera década del siglo XXI señalan que el 3% más rico de la población posee más del 70% de la tierra cultivable, el 57% subsiste con menos del 3% de esa tierra. El 1% más opulento de la sociedad se apropia del 45% de la riqueza, la mitad de la tierra agrícola es detenida por el 37% de los latifundistas. Leech, Garry M.(2002), *Killing Peace*, New York: Information Network of the Americas, p. 9; Clark, Ramsey (2003), "The Future of Latin America"; *War in Colombia*, New York, International Action Center, pp. 23-47.

⁵ El Partido Comunista de Colombia se fundó en 1930. Tuvo un desarrollo en los años treinta entre las comunidades rurales más activas y resistentes. La principal comuna comunista fue la de Viotá, ubicada en Cundinamarca, en el sur central del país. Gilly, Adolfo, (1965), “Guerrillas y repúblicas campesinas en Colombia”, *Monthly Review* (edición en castellano) nº 27, Buenos Aires, diciembre de 1965, p. 33.

⁶ El asesinato de Gaitán ocurrió cuando Bogotá era sede de la Conferencia Panamericana – cuna de la OEA-, la que se aprestaba a recomendar la implementación de medidas y leyes que proscibieran al comunismo. Existió la sospecha de que la CIA había urdido el crimen de Gaitán. Roa Sierra, el sicario que le disparó, fue capturado y linchado por la multitud enardecida. Recientemente, la hija de Gaitán señaló que documentos desclasificados por la CIA reconocen el crimen como propio. Vanessa Davies, (2010), “El asesinato de Gaitán”. *El Correo del Orinoco*, 28 de junio de 2010, pp. 9/10.

⁷ Según Eric Hobsbawm, esta etapa insumió ‘... *la mayor movilización armada de campesinos (ya sea como guerrilleros, bandoleros o grupos de autodefensa), en la historia contemporánea del hemisferio occidental, probablemente con la sola excepción de algunos momentos álgidos de la Revolución Mexicana*’. Hobsbawm, Eric, (1974) *Rebeldes primitivos*, Barcelona, Ariel, cap. "La anatomía de La Violencia en Colombia".

⁸ Alape, Arturo (1985), *La paz, la violencia, testigos de excepción*, Bogotá, Planeta Colombiana editores, p. 68.

⁹ Manuel Marulanda Vélez fue el nombre adoptado por Pedro Antonio Marín, un antiguo militante liberal insurrecto, devenido comunista. Jacobo Arenas, nacido Luís Alberto Morantes, en Bucaramanga en 1924, fue un intelectual de PCC que, influido por el guevarismo, fundó junto a Marulanda las FARC. Fue el principal impulsor del proyecto político legalista Unión Patriótica en 1985. La reconstrucción de los orígenes de la insurgencia y de sus líderes fue tratada por obras como las siguientes: Arenas, Jacobo (1972), *Diario de la resistencia de Marquetalia*, Bogotá, Ediciones Abejón Mono, pp. 34-37; Roldán, Mary (2002), *Blood and Fire: La Violencia in Antioquia, Colombia, 1946-1953*, Duke University Press, pp. 53-61.

Guayaberos. Eran guerrillas de autodefensa campesina; no tenían un mando central unificado ni un plan estratégico para disputar el poder político por la lucha armada revolucionaria. Ninguna de ellas aceptó la orden de desarme emanada del poder, por lo que recibieron el estigma de “Repúblicas independientes” que atentaban contra la “soberanía nacional” del Estado Colombiano. Su población se engrosó con miles de familias campesinas que, perseguidas por hacendados y sicarios a su orden, encontraron asilo en tales comarcas. Hacia 1952, existían cerca de 40.000 guerrilleros liberales y de izquierda en estos asentamientos rurales¹⁰. Herederos de este movimiento caracterizaron la composición campesina y la naturaleza defensiva de las primeras milicias guerrilleras¹¹.

Con el advenimiento de la dictadura del general Rojas Pinilla, algunas poblaciones campesinas se desmovilizaron, aunque los sectores influidos por la izquierda y por liberales progresistas permanecieron en estado de insurgencia. Tampoco la proclamación del Frente Nacional, el acuerdo de conservadores y liberales firmado en 1957 para alternarse en el poder durante 16 años, pudo resolver la cuestión del desarme de dichas regiones. Desconfiando de las promesas gubernamentales, las comunas exigieron a las autoridades mayor presencia con programas sociales, construcción de escuelas y promoción de la salud antes del desarme¹². En condiciones de aislamiento, ante un inminente asedio gubernamental, comenzaron a experimentar cambios revolucionarios. Los núcleos de la guerrilla comunista devinieron grupos de autodefensas de masas; defendieron sus zonas de los ataques de bandoleros a las órdenes de latifundistas; impulsaron asentamientos campesinos, repartieron la tierra entre sus habitantes, organizaron mecanismos de trabajo colectivo y de auxilio a la pequeña propiedad individual; las asambleas de la población instituyeron prácticas judiciales y, para contener la represión del gobierno, trataron de extender las comunidades a otras áreas¹³. El tránsito abierto por las comarcas autogestionadas provocó el encono de las clases propietarias gobernantes. En octubre de 1961 uno de sus voceros, el senador conservador Gómez Hurtado, reclamó el fin de las “*repúblicas independientes*”, señal premonitrice de una intervención militar contra la región¹⁴. El

¹⁰ Pereyra, Daniel (1994), *Del Moncada a Chiapas, Historia de la lucha armada en América Latina*, Los libros de la Catarata, Madrid, p.62-63.

¹¹ “La guerrilla comunista se asienta y se fortalece en zonas que tuvieron en los años treinta papel protagónico en la lucha por la recuperación de la tierra, ubicadas geográficamente en el sur de Tolima y Sumapaz en Cundinamarca. Entonces, por el azar de los acontecimientos, los antiguos líderes de las ligas campesinas se convierten de pronto en avanzados dirigentes guerrilleros. Era una guerrilla, la liberal y la comunista, en su conjunto, de rostro campesino, de objetivos esencialmente agrarios, con una visión militar recortada que no traspasaba los linderos o límites de sus zonas. Pero a pesar de sus dificultades, nunca fueron derrotadas militarmente”. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo, Comisión internacional (2005), *FARC-EP: Esbozo Histórico*, edición corregida y aumentada, Sin lugar ed., c. 1, p. 22.

¹² Un contexto más complejo de las contradicciones sociales que agitaron al campesinado puede verse en: Gilhodes, Pierre (1970), *Las luchas agrarias en Colombia*. Bogotá: Ediciones el Tigre de Papel, pp. 28-40. También en Archila, Mauricio (2003), *Idas y venidas, vueltas y revueltas: Protestas sociales en Colombia 1958-1990*. Bogotá, CINEP, ICANH, pp. 21-28.

¹³ *FARC - EP: Esbozo Histórico*; op. cit., p. 25. Brittain, James J. (2005), “Las FARC-EP en Colombia, una excepción revolucionaria en una era de expansión imperialista”, *Monthly Review*, N° 4, Volumen 57, New York, septiembre de 2005, p. 19.

¹⁴ El legislador arengó: “Hay en este país una serie de Repúblicas Independientes que no reconocen la soberanía del Estado colombiano, donde el ejército colombiano no puede entrar,

asedio a Marquetalia se concretó el 27 de mayo de 1964 con una intervención imponente. Miles de soldados, desembarcos aéreos, bombardeos con napalm a ranchos y humildes granjas y el establecimiento de un cerco a las comunidades enfrentaron a menos de una centena de guerrilleros y campesinos mal armados. Las operaciones tuvieron el asesoramiento norteamericano en el marco del proyecto *LASO* (Latin American Security Operation); apuntaron a los insurgentes ya plenamente identificados con el Partido Comunista de Colombia (PCC)¹⁵.

De la supervivencia a la diseminación territorial.

Los sobrevivientes de Marquetalia constituyeron una milicia itinerante, de medio centenar de guerrilleros. Una asamblea de insurgentes aprobó, el 20 de julio de 1964 en Marquetalia, el llamado “programa agrario”, el primer documento formal de las *proto FARC*. Instruyó en las zonas ocupadas las colonizaciones campesinas. Establecía la confiscación de la propiedad latifundista nativa y de aquella en manos de compañías norteamericanas y la entrega, en forma gratuita, a los campesinos que quisieran trabajarla. Otorgaba los títulos de propiedad a toda una vasta categoría laboral subalterna de colonos, ocupantes, arrendatarios, aparceros, terrazgueros, agregados y otras formas arcaicas de explotaciones¹⁶.

La guerrilla respetaba la propiedad de los campesinos ricos que trabajaban personalmente las tierras. Se garantizaban precios remunerativos básicos y de sostén para los productos agropecuarios. Prometía apoyo técnico y de infraestructura, herramientas y animales de labor. El programa sancionaba el respeto a las comunidades indígenas, devolviéndoles las tierras usurpadas por latifundistas y resguardaba sus formas de autogobierno – sus Cabildos-, su cultura, lengua y organización interna¹⁷. La guerrilla aspiraba a convertir la tarea de la transformación agraria en un espacio de articulación con otras fuerzas políticas nacionales opositoras al régimen. En sintonía con las resoluciones del PCC, convocaba a un Frente Unido de obreros, campesinos, capas

donde se le dice que su presencia es nefasta, que ahuyenta al pueblo, o a los habitantes.... Hay la República independiente de Sumapaz. Hay la república independiente de Planadas, la de Riochiquito...”. Henderson, James D (2006), *La modernización en Colombia: los años de Laureano Gómez, 1889-1965*. Universidad de Antioquía, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, Universidad Nacional de Colombia- sede Medellín, p. 588. Más información sobre la coyuntura se halla en Sánchez, Gonzalo y Peter Bakewell (1985), “La Violencia in Colombia: New Research, New Questions”. *The Hispanic American Historical Review*, Vol. 65, No. 4, Nov., 1985, pp. 789-807.

¹⁵ Dieciséis mil soldados atacaron las posiciones de las milicias. Feder, Ernest (1971), *The Rape of the Peasantry*, New York, Anchor Books, p. 189. El sacerdote revolucionario Camilo Torres dejó asentada la magnitud del papel norteamericano en la invasión del ejército colombiano. Escribió: “Sabemos que la similitud del desembarco de los *marines* en Santo Domingo son los desembarcos del ejército colombiano, dirigidos por la misión militar norteamericana en las *repúblicas independientes*”. Torres Restrepo, Camilo, (1968), *Liberazione o morte. Antologia degli scritti*, Milan, Feltrinelli, p. 54. Jean P. Sartre, Simone de Beauvoir y Jean Duclos dirigieron una carta de protesta contra el gobierno colombiano por la invasión.

¹⁶ Consideraba como unidad económica deseable a las parcelas no inferiores a 10 o 20 hectáreas, según la fertilidad y ubicación de los terrenos. FARC-EP, “El programa agrario”. FARC- EP, Op. cit., p. 151.

¹⁷ El expolio de las tierras de las comunidades aborígenes fue otra fuente de conflictividad, especialmente en el Cauca, donde, en 1980, se creó un grupo de guerrilla indígena, el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL).

medias y estudiantes comprometidas con la destrucción del latifundio y del régimen oligárquico¹⁸.

La “operación Marquetalia” no pudo dismantelar la organización armada; luego de desplazarse junto a grupos familiares a través de la región montañosa, la milicia se arraigó en las tierras bajas de Orinoquia, bajo la Cordillera Oriental, en Meta y Caquetá. La región se transformó en un asentamiento de campesinos que habían huido de la violencia estatal, colonizando el sur selvático del país. Las guerrillas encontraron apoyo en las aldeas campesinas, que los recibieron como protectores de los ataques de las guardias de los terratenientes y de infinidad de bandoleros que asolaban el territorio. En ese marco, en septiembre de 1964, se creó el *Bloque Sur del Partido Comunista de Colombia*, en Cauca, con la fusión de varios contingentes armados. La conferencia estimuló los aprestos para una guerra de guerrillas con la creación de pequeños focos rebeldes itinerantes. Ciro Trujillo, Manuel Marulanda y Jacobo Arenas presidieron el inicial Estado Mayor Conjunto de la organización.

En la Segunda Conferencia, realizada en Sumapaz, en 1966, fue utilizado oficialmente el nombre FARC. El cónclave elaboró los estatutos de la milicia, un reglamento interno, reglas de comando, un plan militar de alcance nacional, un programa político que contemplaba la articulación con el movimiento de masas, un sistema de educación para los integrantes de la guerrilla y para las aldeas donde operaba, dispositivos de propaganda y cuestiones financieras.

La Tercera Conferencia, realizada en 1968, fundó la Escuela Nacional de Formación Ideológica para un estudio más profundo de las modalidades de luchas guerrilleras posibles; y realizó una fuerte autocrítica por los golpes recibidos por parte de la represión militar. Se crearon otros frentes guerrilleros. En 1974, la Quinta Conferencia, convirtió al grupo guerrillero en un ejército revolucionario, al abrirse frentes en nuevas regiones del país. Las políticas de colonizaciones afianzaron sus articulaciones con las comunidades; en algunas comarcas ya eran un estado dentro del Estado¹⁹. La Sexta Conferencia de las FARC, en 1978, exhibió el crecimiento de la organización; habían creado Estados Mayores en cada uno de los frentes, con mandos políticos y militares. En los veinte frentes operaban unos mil hombres armados. Su periódico, *Resistencia*, comenzó a salir en forma regular. Un recambio generacional produjo el licenciamiento de ciertos líderes históricos²⁰.

2. LA GRAN APUESTA: UNION PATRIOTICA.

La construcción política.

En Séptima Conferencia, en mayo de 1982, las FARC contaban con cerca de 3000 milicianos. La guerrilla a la defensiva había mutado *en una fuerza protagonista del conflicto social*, las ahora denominadas FARC-*Ejército del Pueblo*. La *Campaña*

¹⁸ FARC-EP, “El programa agrario...” pp. 152-153. El Frente Unido del Pueblo se presentó como alternativa política contra la “democracia restringida” del bipartidismo. Camilo Torres fue uno de sus principales impulsores atrayendo a sus filas a activistas del movimiento universitario. Villanueva. Orlando, (1995), *Camilo. Acción y utopía*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, pp. 56-65.

¹⁹ Los frentes eran agrupamientos armados en un territorio fijo y estable, que reunía a unos 150 guerrilleros. La estructura estaba formada por núcleos móviles, llamados columnas, de cerca de 30 hombres, que incursionaban en acciones armadas y se replegaban. Solían dividirse en compañías.

²⁰ Se jubilan algunos dirigentes que, envejecidos, ya no resistían el ritmo de combates y desplazamientos. El caso más conocido fue el de Isauro Llosa, el Capitán Lister, quien volvió a labrar una parcela en el anonimato

Bolivariana por una Nueva Colombia (CBNC), insinuó un movimiento político con aspiraciones a discutir con el Estado un programa de cambios sociales y la pacificación. El mismo fue impulsado por el Partido Comunista, aceptando la oferta del presidente Belisario Betancur para una salida negociada de la larga beligerancia.

Las imágenes trágicas del actual recrudecimiento de la guerra han sepultado e invisibilizado aquella coyuntura en la que las FARC - EP demostraron un comportamiento político flexible y realizaron proposiciones pacificadoras; propuestas progresistas, como el establecimiento de controles democráticos sobre los aparatos represivos del Estado, contaminados con acciones extralegales, narcotráfico y grupos paramilitares. Como parte de ese proyecto, firmaron una tregua con el gobierno de Betancur en mayo de 1984, los “Acuerdos de la Uribe”, sellados en Casa Verde²¹. Inspeccionados por una Comisión de Verificación, los acuerdos no implicaban el desarme de los insurrectos. El mismo sería gradual, a medida que se cumplieran las condiciones y garantías para el ingreso de las FARC a la política legal.

En las conversaciones, las FARC solicitaron la instrumentación de un conjunto de reformas democráticas para la distensión del conflicto; entre ellas la elección popular de alcaldes y gobernadores, descentralización administrativa y garantías para la actividad política de todos los movimientos. La guerrilla había alcanzado un objetivo relevante: asumían el status de fuerza beligerante, reconocida como interlocutora por el gobierno. Cumpliendo con lo acordado, lanzó el partido Unión Patriótica (UP). La decisión sembró promisorias expectativas de renovación política. Miles de personas participaron en la convocatoria del Frente: partidos, sectores internos de partidos, activistas sindicales y organizaciones de masas apoyaron la iniciativa. Aunque el PCC fue el principal impulsor de UP, también su sumaron destacadas personalidades de la cultura, profesionales, académicos y dirigentes de movimientos sociales y regionales. UP asumió su vida como partido legal, impulsando a varios miembros de la guerrilla a salir de la clandestinidad, entre ellos el comandante Iván Márquez²².

La aparición de UP no debe confundirse con un mero apéndice digitado por la guerrilla. A ella convergieron militantes sociales y políticos deseosos de impulsar cambios progresistas, transformaciones radicales de las estructuras políticas tradicionales y del anacrónico régimen de concentración de la propiedad rural; también quienes se propusieron denunciar y enfrentar la viscosa expansión del narcotráfico en la financiación de los partidos tradicionales. UP propulsó una reforma constitucional moderna y democratizadora, finalmente sancionada en 1991, aunque sin la participación de las FARC.

Desde los primeros pasos, la coalición mostró signos de independencia (también de discrepancia) con respecto a las FARC. Varios dirigentes del PCC abandonaron la lucha guerrillera por la político-electoral “de superficie”. Jacobo Arenas, perfilado como futuro candidato presidencial de UP, fue reemplazado por el profesor Jaime Pardo Leal, un prestigioso abogado, juez y profesor universitario miembro del PCC. Dirigentes como Bernardo Jaramillo bregaron por ampliar la base de apoyo de UP, con total autonomía de las FARC, y vincularla con la Internacional Socialista. También criticó a

²¹ El campamento sede del Secretariado Nacional de las FARC, localizado en el departamento de Meta. El diálogo convocó a otros grupos guerrilleros, como el Movimiento 19 de abril, el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación y Quintín Lame

²² Fue elegido congresista de UP por el Departamento de Caquetá, en 1986. Regresó al monte cuando todos sus compañeros de escaños fueron asesinados. Reemplazó a Raúl Reyes en la Secretaría Internacional de las FARC, luego de que aquel fuera muerto por un ataque del ejército colombiano en Ecuador, el 1 de marzo de 2008.

la guerrilla por mantener su consigna de "*todas las formas de lucha*" cuando las adhesiones electorales de UP crecían significativamente²³.

En los comicios de 1986, UP obtuvo el tercer puesto con 320.000 votos; fueron elegidos 14 parlamentarios, 17 diputados provinciales y más de 350 concejales municipales.

Teniendo en cuenta la brevedad de la campaña política y los escasos recursos económicos, UP valoró el resultado obtenido. A fines de los ochenta, era una fuerza con chances de poder y Bernardo Jaramillo, su candidato *asesinado en la campaña electoral* de 1990, figuraba con buenas expectativas en las encuestas.

Una conjunción de intereses derechistas conspiró contra el reconocimiento de la guerrilla como actor político y contra el ingreso de una fuerza progresista a la escena electoral. El ejército, los grandes terratenientes y la mafia del narcotráfico participaron activamente en la brutal clausura de la experiencia político electoral de una fuerza guerrillera que comenzaba a discutir la alternativa de la desmovilización.

La aniquilación sistemática.

El crecimiento tentacular del narcotráfico, denunciado por los candidatos de UP y por las FARC, se convirtió en un factor protagónico en el régimen político colombiano a partir de la década del ochenta²⁴. Las redes generadas alrededor de la producción y exportación de marihuana fueron el dispositivo a partir del cual se montó y expandió el tráfico y luego la producción de cocaína con los cárteles de Medellín y Cali²⁵. El crecimiento de este tipo de fortunas ligó los negocios del *capitalismo mafioso* con los circuitos de lavado de dinero y con la búsqueda de la impunidad. En el primer itinerario, se relacionaron con terratenientes, empresarios, industriales y banqueros (espacios elegidos por sus inversiones y negocios); en el segundo con representantes de la autoridad estatal, de sectores de las FFAA y de dirigentes de partidos políticos. Otras condiciones estructurales de la sociedad colombiana aceitaron la pista del narcotráfico. Un estado "débil" en el control del territorio, instituciones permeables a menesteres ilícitos, un campesinado empobrecido - que hizo del cultivo de la coca una actividad de

²³ Nacido en Manizales, Jaramillo era un dirigente comunista de origen agrario, convertido en candidato a presidente de UP, luego del asesinato de Pardo Leal. Había alcanzado un altísimo nivel de popularidad en los meses previos a las elecciones de 1990 y proponía ampliar la coalición con un acuerdo con Alianza Democrática - M 19, del ex guerrillero Carlos Pizarro. Jaramillo y Pizarro fueron asesinados en 1990 por paramilitares y sicarios del narcotráfico, las AUC de los hermanos Castaño. Investigaciones recientes vincularon a sus verdugos con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). "Los magnicidios y el DAS" (2010). *Semana.com*, Bogotá, 9 de enero de 2010.

²⁴ Las FARC proclamaron reiteradamente su posición contraria a la irradiación del narcotráfico en la sociedad colombiana, pero este pronunciamiento fue escasamente considerado por la corriente principal de los análisis sobre la guerrilla. "*Nosotros no tenemos relación ni mucho menos negocios con ningún cartel de drogas. Las FARC-EP rechazan el narcotráfico por principio y por ética. En materia financiera, continuaremos con nuestra política de cobrar el Impuesto para la Nueva Colombia a aquellas personas, naturales o jurídicas, enemigas de la democracia, cuyo patrimonio supere los mil millones de pesos, porque nuestra lucha es contra un Estado injusto, y contra los ricos que lo sustentan y lo usufructúan. Y si estos le dan dinero al Estado para que adelante la guerra contra el pueblo, también tienen que dárselo a este para que se defienda de la agresión. Lo demás es la desinformación*". Marulanda Vélez, Manuel, (2005) "Las FARC-EP: 30 años de lucha por la paz, democracia y soberanía". FARC EP, *Esbozo...* p. 96. En años recientes, los gobiernos de Colombia y de EEUU le han adjudicado a las FARC el término de "narcoguerrilla", en el marco del Plan Colombia primero y luego, de la Iniciativa Regional Andina patrocinada por Bush. La evolución contemporánea de esta cuestión está fuera del radio inspección del presente artículo.

²⁵ Celis Méndez, Luís Eduardo (2008), "Construcción inconclusa de la nación colombiana". ALAI (Agencia Latino Americana de Información). *América Latina en Movimiento*, Quito, 22 de agosto de 2008, pp. 11-13.

subsistencia -, y los grupos armados que financiaron con sus caudales sus actividades permitieron la expansión de aquel negocio.

Los intereses de la *narcoburguesía* se fusionaron con la clase latifundista²⁶, compartiendo la misma estrategia de defensa del orden y un instrumento efectivo de combate contra la guerrilla: los grupos paramilitares. "Son organizaciones –confesaba un funcionario del gobierno en 1988-, que empiezan a contar con la simpatía y el apoyo económico de los terratenientes más reaccionarios de cada región del país"²⁷. La reproducción del paramilitarismo y su secuela, de destrucción de UP, fue la principal causa de la frustración del proceso de pacificación y de la promesa de desmovilización por parte de la guerrilla. Bajo el eufemismo de "autodefensas", civiles alentados por latifundistas, narcotraficantes y militares se comprometieron a destruir la guerrilla y a la que estimaban era su base campesina simpatizante²⁸.

Analistas insospechados de condescendencia con la guerrilla desnudaron el vínculo de varios escuadrones con jefes del ejército, desde fines del gobierno de Turbay Ayala²⁹. La maniobra expresaba el desacuerdo de los mandos castrenses con la política de paz anunciada por el candidato Belisario Betancur. Las "autodefensas" practicaron la guerra que los acuerdos de paz le impedían hacer a las FFAA. El ejército entrenó, apoyó y armó a los primeros *centuriones* de Puerto Boyacá, en el nororiente antioqueño y en la región del Ariari en el Meta. Se convirtieron en "ejércitos privados", en una *alianza de seguridad privada*, animada por terratenientes, empresarios y militares, para aniquilar a las FARC y a sus frentes de masas. La expresión más turbia de este connubio fue el gran empresario de la cocaína Gonzalo Rodríguez Gacha, dueño de tres "ejércitos privados" en municipios de Boyacá y de Putumayo que combatieron a las FARC y aseguraron sus negocios ilícitos³⁰. La ofensiva derechista multiplicó la creación de "autodefensas", como las unificadas bajo el mando de los hermanos Fidel y Carlos Castaño, quienes también apuntaron a la destrucción de los militantes de UP³¹.

²⁶ Mayolo, Carlos,(1988) "El Narcoagro". *Semana*, Bogotá, No 1023, 29 de noviembre de 1988, p 17. La compra masiva de tierras por los narcotraficantes, a partir de los ochenta, y el nuevo latifundismo emergente han sido asimilados a una "contrarreforma agraria". Sánchez, Ricardo, (1997), *Drogas ilícitas en Colombia. Su impacto político, económico y social*, Bogota, Ariel-PNUD, pp. 310-315.

²⁷ Declaraciones del Ministro de Instrucción Criminal, Eduardo Lozano, reproducidas por *Semana* nº 341, Bogotá, 15 de noviembre de 1988, p. 14. Terratenientes y narcos tenían razones profundas para aniquilar a la guerrilla. Las FARC cobraban un "impuesto revolucionario", el "gramaje", a los grandes productores de cocaína que operaban en su territorio, no a los campesinos plantadores de subsistencia. .

²⁸ Los paramilitares usaban la atroz metáfora de "drenar el mar" para aludir a las matanzas colectivas de campesinos que no denunciaban a la guerrilla. El procedimiento guarda perfecta similitud con el de los oficiales franceses que combatieron al FLN en Argelia, desde fines de los cincuenta.

²⁹ Gamboa Arguello, Oscar (2006), *Desmovilización de los paramilitares: una tensión entre la criminalidad y las políticas de seguridad ciudadana*, Tesis de Maestría, Bs. As. Washington, Universidad del Salvador y Colegio Interamericano de Defensa, pp. 8-9. Turbay Ayala gobernó entre 1978 y 1982; Betancur entre 1982 y 1986.

³⁰ Reyes Posada, Alejandro,(2009), *Guerreros y Campesinos, El Despojo de la Tierra en Colombia*, Bogotá, Editorial Norma, "Introducción". Sobrevivientes de UP sindicaron a Rodríguez Gacha, alias El Mejicano, como instigador del asesinato de Jaime Pardo Leal.

³¹ Financiados por los ganaderos de la región de Córdoba, los hermanos Castaño crearon, a comienzos de los '80, las Autodefensas Campesinas Córdoba y Urabá (ACCU); núcleo base de la convergencia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una década después. Fueron los autores de cuantiosas matanzas colectivas de campesinos, a los que se acusaba de simpatizar o no denunciar a las FARC. Las escuadras derechistas estuvieron genéticamente

La represión paramilitar a UP mostró la intransigencia de las elites propietarias (latifundistas tradicionales y narcotraficantes de nuevo cuño), refractarias al surgimiento de un grupo político al que consideraron peligroso para sus actividades e intereses. La vinculación de la criminalidad política con la estrategia de sectores de las clases dominantes que rechazaban la renovación partidaria no pasó desapercibida para las organizaciones defensoras de los derechos humanos³².

La renovación política en curso alentó un proceso de descentralización que, por vez primera, habilitaba la elección popular de gobernadores, alcaldes y otras autoridades locales. Hacendados y grandes productores, liberales y conservadores, se opusieron a que las alcaldías escaparan a su dominación directa y atacaron virulentamente a los candidatos de UP que impulsaban esas reformas. La oposición tradicionalista, la cúpula eclesiástica y la prensa conservadora prepararon el ambiente sembrando pronósticos catastrofistas ante un posible triunfo de la izquierda; los gobiernos municipales de UP ponían en *peligro los lazos de la unidad nacional*³³.

Tácticas de exterminio y factores de la impunidad.

Miles de seguidores UP y del PCC fueron masacrados en la última década y media. El reformismo social – radical en el diagnóstico de la concentración de la propiedad -, que prometía la incipiente coalición de izquierdas alentó a grandes hacendados y al *narcoagro* a promover a los escuadrones paramilitares.

Las tácticas represivas empleadas fueron tan diversas como atroces. En ocasiones el “escarmiento” fue propiciado por *olas de rumores* que recorrieron el país adelantando la existencia de planes de exterminio diseñados por fuerzas militares para destruir a los líderes y a los apoyos de la coalición en las regiones en las que habían triunfado en los comicios³⁴.

Numerosos atentados fueron ejecutados contra candidatos de UP durante la campaña electoral y en los primeros días de la asunción de sus cargos. La criminalidad política asoló los municipios y localidades donde UP había ganado las elecciones y comenzaba a encaminar programas de fuerte inclusión social, con la edificación de escuelas, hospitales y obras públicas. Bajo esta modalidad, la represión paramilitar se cebó con el

filiadas con el narcotráfico, actividad que le dio a Fidel y Carlos Castaño el pasaporte a la fortuna y a la tumba, ambas prematuras. En su libro, Castaño reveló su participación en los crímenes de la dirigencia de UP y en varias matanzas de campesinos, entre ellas la de Mampiripán (Meta), ocurrida a mediados de julio de 1997 con la cooperación del ejército, la policía, funcionarios de la ciudad y de asesores norteamericanos. Castaño Carlos y Mauricio Aranguren (2001), *Mi confesión*, Bogotá, Norma, pp. 123/134.

³² Desde su sede en Bogotá, el Defensor del Pueblo reconocía la existencia “*de una relación directa entre el surgimiento, la actividad y el apoyo electoral de la Unión Patriótica y el homicidio de sus militantes en regiones donde la presencia de ese partido fue interpretada como un riesgo para el mantenimiento de los privilegios de ciertos grupos*”, “Informe del Defensor del Pueblo, 1992”. Corporación Reiniciar (2006), *La Ley de ‘Justicia y Paz’ no es un instrumento para esclarecer el genocidio contra la Unión Patriótica*, Bogotá, p. 6.

³³ En febrero de 1986, la asamblea de la Conferencia Episcopal condenó a las coaliciones de izquierda. Cepeda Castro, Iván (2006), “Genocidio político: el caso de la Unión Patriótica en Colombia”, *Revista CETIL*, año 1, nº 2, Bogotá, septiembre de 2006, p. 107. Un diario conservador pronosticaba: “*Habrà de suponerse, por forzosa consecuencia, que desaparezcan los lazos de unidad con el gobierno nacional, que no opera, y el municipal, en que actuarán los dirigentes marxistas*”. *La República*, 19 de febrero de 1988, p.4.

³⁴ Por ejemplo el *Plan Esmeralda* amenazaba destruir a UP y al PCC en Meta y Caquetá, dos bastiones electorales. Otras amenazas similares se denominaron Operación Cóndor y Plan Baile Rojo. Quiroga Carrillo, Jahel (2006), “La Unión Patriótica: el exterminio de una esperanza”, en Iván Cepeda Castro, “Genocidio...” op.cit., p. 106.

municipio de El Castillo (Meta), donde fueron derrocados y asesinados cuatro alcaldes en forma consecutiva, además de varios funcionarios y campesinos partidarios de UP³⁵. Otras modalidades fueron las incursiones que desataban el terror colectivo para amedrentar a la comunidad. Los grupos paramilitares, gozando de impunidad, irrumpían en las localidades donde UP tenía fuerte inserción social provocando brutales crímenes colectivos contra militantes y campesinos ligados a la coalición. Una muestra de esta táctica fue el asesinato de cuarenta militantes de UP, ejecutados el 11 de noviembre de 1988 en la plaza central de Segovia, ciudad de Antioquia gobernada por una alcaldesa de UP³⁶.

Los crímenes contra adherentes a UP incluían a figuras con compromisos comunitarios en regiones donde existían conflictos laborales y otros engendrados por la fuerte concentración de la tierra. La víctimas eran miembros de sindicatos, de asociaciones cívicas, cooperativistas, educadores, etc.

La metodología empleada contra los líderes nacionales más destacados, como los candidatos presidenciales y legisladores, fue el atentado personal a través de operaciones encubiertas con la utilización de sicarios juveniles, con acciones conjuntas de unidades de inteligencia del ejército y paramilitares o con iniciativas de escuadrones de la muerte. Esos procedimientos se usaron en los asesinatos de los candidatos presidenciales de UP, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, ocurridos en 1987 y 1990 respectivamente. En total, ocho congresistas fueron eliminados en atentados en sus casas.

UP denunció reiteradamente la impunidad y tolerancia estatal con el exterminio. En 1993, la conducción partidaria alertó al presidente Gaviria sobre un nuevo plan de destrucción elaborado por los mandos castrenses, la “Operación Golpe de Gracia”, pero la denuncia fue desestimada por el gobierno³⁷. El 9 de agosto de 1994, un comando integrado por suboficiales del Ejército y paramilitares asesinó a Manuel Cepeda Vargas. UP vio extinguirse al último de sus representantes en el Congreso de la República. Se calcula que el exterminio de miembros de UP alcanzó a más de 5000 personas, además de provocar el desplazamiento forzoso de campesinos y la pérdida de sus

³⁵ Cepeda Castro, Iván y Claudia Girón Ortiz (2005), “Vida y muerte de la Unión Patriótica Colombiana”. *Le Monde Diplomatique*, nº 71, edición Cono Sur, mayo de 2005, pp. 12-14. “Condenan a la Nación”(2009). *El Espectador.com*, 9 de marzo de 2009.

³⁶ Durante la noche, sicarios armados a bordo de vehículos todo terreno ametrallaron a una población desprevenida. La brutal punición no fue repelida por los integrantes del puesto policial, que se mantuvieron en posición displicente. Entre los sicarios participaron Alonso Baquero Agudelo (El Negro Vladimir) y Fidel Castaño. Castaño era la encarnación del anticomunismo. Estaba complicado en el narcotráfico, asociado con Rodríguez Gacha (El mexicano), jefe del Cartel de Medellín. Fundó uno de los primeros grupos paramilitares, integrando a ellos a trabajadores de sus fincas y entrenándolos en lucha contraguerrillera. Era conocido en la región por ofrecer a grandes propietarios, a cambio de dinero, servicios de seguridad contra las guerrillas.. Sobre la confesión de Baquero Agudelo, véase *Semana.com*, 8 de septiembre de 2008; también “Masacre de Segovia (Antioquia, noviembre de 1988)”. *Semana* nº 341, 15 de noviembre de 1988, pp. 8-9.

³⁷ El senador Manuel Cepeda afirmó en la sala en octubre de 1993: “Hace pocos días la dirección del PC denunció al señor Ministro de Defensa la existencia de un plan denominado ‘Operación golpe de gracia’, urdido por los altos mandos militares para eliminar la dirigencia comunista o empapelarla mediante juicios amañados. El Ministro manifestó su total incredulidad ante tales afirmaciones, hoy corroboradas escandalosamente por las incitaciones provocadoras del Comandante de las Fuerzas Militares”. Declaraciones reproducidas en Cepeda Vargas, Iván,(2006) “Genocidio...” op. cit., p 108.

tierras, con el objeto de destruir la base social de la fuerza izquierdista. La impunidad todavía rige sobre la abrumadora mayoría de casos³⁸.

El exterminio político de UP alcanzó la magnitud de un genocidio debido a la existencia de mecanismos de tolerancia, participación e impunidad estatal. Entre sus características más singulares se destaca que fue realizada bajo un régimen de democracia representativa³⁹. Tuvo como propósito terminar con un grupo político y desterrar de la vida pública a sus simpatizantes y a las bases sociales que resistieron la práctica de ese tipo de violencia. Efectivamente, la destrucción sistemática redujo drásticamente la fuerza de UP, su caída electoral fue el producto de la sangría sufrida⁴⁰. Fue esa peculiaridad la que impulsó a los familiares de las víctimas a solicitar ante instituciones jurídicas internacionales que el proceso sea tipificado como un *genocidio por razones políticas*⁴¹. Otro rasgo notorio de la luctuosa empresa fue que la persecución y destrucción se llevó a cabo en un prolongado período de dos décadas, abarcando a seis presidentes de diferente coloratura partidaria y provocando graves consecuencias en los patrones de la convivencia social en el país⁴².

La impunidad que cobijó a los crímenes creció al calor de ciertos procedimientos de las autoridades estatales. Por ejemplo, el sistema legal se habituó a utilizar dispositivos ilegales apañadores del ejercicio de la violencia política selectiva. Bajo la forma de estados de excepción o medidas de seguridad se concedieron potestades de policía judicial a las fuerzas armadas que permitieron la aplicación de métodos de guerra sucia, como la organización de grupos paramilitares; las operaciones encubiertas de miembros del ejército o la práctica de la “guerra psicológica”⁴³.

La *invisibilidad* de la participación gubernamental en la masacre fue favorecida por la manera confusa y distorsionada con que fueron explicados los acontecimientos por los medios de información dominantes e incluso por calificados analistas de las ciencias sociales. Según estas interpretaciones, lo acontecido con UP fue una desafortunada convergencia de “hechos inconexos”, como delitos vinculados con el narcotráfico o vindictas individuales por los atentados de la guerrilla⁴⁴. La proliferaron de otros

³⁸ Guillén Lozano, Carlos (2002), “Prólogo” a Matta Aldana, Luis Alberto, *Poder capitalista y violencia política en Colombia. Terrorismo de Estado y Genocidio contra la Unión Patriótica*, Bogotá, Ideas y Soluciones Gráficas, pp. 3-5.

³⁹ Según Eric Sotas, director de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT): “El crimen contra la UP es algo bastante especial en el mundo porque en Colombia, al mismo tiempo que se han mantenido las instituciones democráticas, se ha tratado de aniquilar un grupo político entero”. Campos Zornosa, Yezid (2003), *Memoria de los silenciados. El baile rojo*, Bogotá, Editorial Ceicos, p. 14.

⁴⁰ En 2002, después de sufrir la brutal cacería, UP obtuvo menos de 50.000 votos. Cepeda Castro, Iván (2006) “Genocidio político...” op. cit., p. 105.

⁴¹ Si bien hay razones evidentes de la perpetración de un genocidio con móviles ideológicos, el derecho internacional no incluye como víctimas a los grupos políticos en la definición del crimen de genocidio. En 1948, la *Convención para la prevención y la represión del crimen de genocidio* solo tipificó ese delito para grupos étnicos, raciales, nacionales y religiosos.

⁴² Cepeda Castro, Iván, (2006) “Genocidio ...” op. cit., pp. 101-102..

⁴³ “Vida y muerte...” op.cit. p. 13.

⁴⁴ El historiador de la Universidad Nacional de Colombia Marco Palacios es partidario de dichas interpretaciones. Sostiene que la agresión contra la UP fue el resultado de un “fuego cruzado” de las partes del conflicto armado colombiano. Palacios, Marco (2006), *Entre la legitimidad y la violencia. Colombia, 1875-1994*, Bogotá, Norma, p. 290. Para el historiador Bushnell, de la Universidad de Florida, los crímenes fueron una “vendetta de los narcotraficantes contra la UP”. Bushnell David, (1996), *Colombia, una nación a pesar de sí misma*, Bogotá, Planeta, pp. 353, 361 y 362.

discursos públicos, emitidos por gobernantes, jefes de las FFAA, políticos, dirigentes empresariales, jefes eclesiásticos, etc., operaron como otras tantas formas de justificación indirecta y banalización de la aniquilación de UP. Con un peso gravitante en la opinión pública, ese tipo de interpretaciones propendió a deslegitimar y crear un muro de refracción contra los reclamos y alertas levantados por las víctimas. No faltaron ocasiones en que las denuncias sobre amenazas inminentes contra UP fueron malversadas y calificadas como ardid publicitarios, instalados por la izquierda para disimular su decadencia.

Como corolario del proceso, la impunidad fue cimentada por disposiciones administrativas del Estado Colombiano que terminaron consagrando “legalmente” el trágico desenlace sufrido por el grupo político. En septiembre de 2002, una resolución del Consejo Nacional Electoral le quitó la personería legal a UP, impidiendo su funcionamiento y entorpeciendo gravemente la posibilidad de acción pública a sus sobrevivientes⁴⁵.

La encrucijada de las FARC. La negociación política bajo fuego.

Los líderes de las FARC expresaron cautela ante las promesas gubernamentales y los riesgos que acechaban al proselitismo de UP. Frente al aumento de los asesinatos, el Secretariado Nacional de la guerrilla le propuso a la dirección de UP la protección en sus campamentos, pero esta no aceptó el convite.

Desatada por los sicarios la cacería irrestricta de militantes, las FARC decidieron el regreso al teatro de sus operaciones rurales. Si bien es cierto que la guerrilla nunca se “desmovilizó”, no parece exagerado comprender este comportamiento como un acto de supervivencia. La prensa hegemónica y las fuerzas gubernamentales eludieron un análisis profundo de las circunstancias en que las FARC tomaron aquella decisión; la juzgaron, expeditivamente, como una muestra más de insinceridad o duplicidad de la organización.

Otras conductas de la guerrilla tuvieron un tratamiento opaco y mezquino en los registros e interpretaciones oficiales. Bajo la atmósfera del fuego cruzado, los líderes de las FARC no rompieron las negociaciones en forma inmediata; dieron un plazo para que el nuevo presidente, Virgilio Barco (1986-1990), cumpliera con los actos de distensión. En este explosivo entramado, Manuel Marulanda promovió el consenso de todas las fuerzas guerrilleras para mantener una solución política del conflicto. Con ese fin, en 1987, las FARC, el M 19, ELN, EPL, Quintín Lame y el PRT conformaron la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB). El cónclave insurgente patrocinó una alternativa dinamizadora de la vida política: el camino de la pacificación debía conducir a la realización de una Asamblea Nacional Constituyente.

Sin embargo, cuando las FARC no habían abandonado la tregua, el nuevo gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994) decretó, el 9 de diciembre de 1990, el ataque y bombardeo a Casa Verde, la sede del Secretariado Nacional de los insurgentes. Las FARC consideraron la acción del presidente como una “traición” y reanudaron las operaciones militares con el propósito de volver a sentar al gobierno en la mesa de negociaciones⁴⁶.

⁴⁵ El Consejo utilizó el argumento de que, con 50000 votos obtenidos en las elecciones de 2002, UP no reunía los requisitos para su reconocimiento como fuerza política nacional.

⁴⁶ Las FARC culparon al presidente por el colapso de la negociación: “El presidente Cesar Gaviria (1990-1994) nos atacó en Casa Verde, sin antes habernos declarado la guerra,

A lo largo de la década de 1990, los nuevos intentos de acuerdos no lograron desactivar la guerra civil. Las negociaciones de la CGSB y el gobierno fueron llevadas a Caracas el 15 de mayo 1991; luego fueron trasladadas a Tlaxcala, Méjico, el 10 de marzo de 1992, se reiniciaron durante la presidencia de Pastrana, en 1999, en San Vicente de Caguán (Caquetá), pero culminaron abruptamente en 2002. La ruptura hizo posible que las Fuerzas Armadas retomaron el control de la zona desmilitarizada o "zona de despeje", una comarca con la superficie de Suiza situada al sur del país que, a pedido de la guerrilla, había sido evacuada por el ejército⁴⁷.

Expansión de las FARC en los Municipios en el período estudiado⁴⁸.

| Año municipios | Municipios | Porcentaje de |
|-------------------|------------|---------------|
| 1964 | 4 | 0,04 |
| 1970 | 54 | 0,50 |
| 1979 | 100 | 9,00 |
| 1985 | 173 | 15,00 |
| 1991 | 437 | 41,00 |

Conclusión.

El análisis del pasado permite observar el exterminio de UP como una práctica enraizada en el comportamiento de los sectores dominantes y los gobiernos colombianos para excluir y reprimir a las fuerzas liberales reformistas, progresistas y de izquierda. La violencia política fue acunada y “naturalizada” en el terreno de los fuertes antagonismos sociales entre una masa de campesinos despojados y las elites latifundistas. Marginalidad, ocupación de tierras por los campesinos y virulentos desalojos apañados por los sucesivos gobiernos, alimentaron el caldero de los enfrentamiento de clases. Desde mediados del siglo XX, este proceso ya se expresaba con todos los ingredientes de la acción directa: magnicidios, expediciones punitivas de sicarios, autodefensas armadas campesinas liberales y comunistas, invasiones del ejército colombiano y desplazamientos crónicos de campesinos. La drástica expedición militar contra Marquetalia (y las comarcas vecinas), a mediados de 1964, ensamblada en la estrategia de contrainsurgencia propiciada por el gobierno de Estados Unidos, transformó a las tradicionales autodefensas campesinas en una fuerza guerrillera organizada: el Bloque Sur primero, luego devenido FARC. Su programa de distribución de la tierra y su reclutamiento *mayoritariamente campesino* canalizaron las demandas

agotando las posibilidades de encontrar una salida política antes de la guerra, al tiempo que expertos en política, habían dicho que las condiciones para realizar conversaciones de alto nivel estaban dadas, para desempantantar la situación que se nos estaba presentando en varias partes con los operativos y el incumplimiento de los anteriores gobiernos”. Marulanda Vélez, Manuel,(2005), “27 de mayo de 1994. 30 años de las FARC EP”, en: *FARC- EP. Esbozo...* Capítulo 2, p. 76.

⁴⁷ Amnistía Internacional (2002). *Colombia. San Vicente de Caguán tras la ruptura de las conversaciones de paz: una comunidad abandonada*, Octubre de 2002, pp. 12-15.

⁴⁸ Brittain, James,(2005) “Las FARC-EP...” *Monthly Review*, nº 4, v. 57, New York, septiembre de 2005, p 23.

de los pequeños productores, hostigados por los grandes hacendados. Esa conjunción permite comprender el carácter estructural de ciertos comportamientos campesinos y la complejidad del fenómeno social y político que nutrió a la guerrilla. Las zonas controladas por las FARC se transformaron en “santuarios” de sucesivas oleadas de campesinos desplazados que impulsaron nuevas colonizaciones de tierras en la región selvática (una migración que todavía continúa). No resulta exagerado afirmar que en esos distritos, las FARC actuaron como “un estado”, una forma de poder reconocida por la comunidad rural sobre la cual “legislaba”, estableciendo, además, mecanismos cuasi formales de “tributación” sobre los grandes hacendados.

Desde fines de los años 70, la guerrilla consolidó su arraigo en diversos departamentos del país, a los que aglutinó en bloques, zonas donde operaban varios frentes permanentes de combate. Ese progreso territorial instó a las FARC a transformarse en “Ejército Popular”, una fuerza que desplegó *acciones ofensivas* contra las fuerzas del orden y comenzó a discutir con las autoridades gubernamentales el control de diversas regiones del país. En esa trayectoria de crecimiento construyó, quizás, la estrategia política más importante de su historia, el lanzamiento de Unión Patriótica. La novel formación fue una convergencia de la voluntad política de las FARC y de aspiraciones autónomas y críticas de la sociedad civil, contra el inmovilismo y la corrupción (esta última, inoculada por el narcotráfico hasta los entresijos de la financiación y administración del poder) del régimen bipartidista. UP abrió una coyuntura inédita en el derrotero de la guerrilla, la posibilidad de consensuar con otros actores sociales y políticos, y con el gobierno, un horizonte de renovación del régimen, que *podía conllevar la desmovilización de sus fuerzas*. La iniciativa sembraba perspectivas promisorias, aunque también removía riesgos inminentes, entre ellos el rechazo de la poderosa derecha vernácula y de la insidiosa geopolítica de la “segunda guerra fría” de las administraciones de Reagan y Bush. Esta reacción pasó a los hechos instrumentando un proyecto de aniquilación sistemática e irrestricta de UP y de su entorno de simpatizantes. En sus fines más inmediatos, las masacres fueron una respuesta para impedir una salida negociada del prolongado conflicto armado en Colombia. Los mandos castrenses y grupos paramilitares (varios compuestos por sicarios del narcotráfico) fueron la principal herramienta utilizada contra los progresos de la izquierda en el sistema político y contra los avances de ciertos dispositivos de democratización y descentralización del régimen, insinuados con la aparición de UP. La apuesta de las FARC a construir una fuerza política legal fue diezmada con el concurso de la impunidad y complicidad de diversos gobiernos que sucedieron a Betancur. La brecha democrática abierta tímidamente a mediados de los años 80 fue sangrientamente anegada por una violencia revanchista que exhibió la anatomía del genocidio político.

La minuciosa destrucción de una fuerza política legal, creada para contribuir a la distensión del conflicto armado, parecía confirmar fatalmente las viejas convicciones que dieron origen a la guerrilla y que la impulsaron a recurrir a la lucha armada. El régimen colombiano, conservando la trama institucional de una democracia representativa, toleró la exclusión brutal de un proyecto de transformaciones socioeconómicas progresistas y de reformismo político democratizador y descentralizador, aun cuando quienes las propulsaban se ciñeran a las reglas y normas de la legalidad constitucional. Una mirada no necesariamente teñida de faccionalismo podía observar, con nutrida evidencia a su alcance, que la vía de acción democrática para impulsar transformaciones estructurales y su corolario, el desarme, conducía al

cadalso. Bajo el fuego impune de los sicarios, la añeja caracterización que dio nacimiento a las FARC no resulta aún fácil de refutar.

,

.